



Asamblea General

Distr. general
18 de abril de 2008
Español
Original: inglés

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES SOBRE TEXTOS DE LA CNUDMI (CLOUT)

Índice

	<i>Página</i>
Casos relativos a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CIM)	3
Caso 770: CIM 4, 11, 35, 36, 38, 39, 40, 49, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 96 - República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC] (30 de marzo de 1999)	3
Caso 771: CIM 9, 50, 74, 78 - República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC] (21 de mayo de 1999)	5
Caso 772: CIM 1 1); 6; 57 1) a) - Alemania: Bundesgerichtshof - III ZR 237/02 (30 de abril de 2003)	6
Caso 773: CIM 4, 36, 38, 39 1), 40, 44 - Alemania: Bundesgerichtshof - VIII ZR 321/03 (30 de junio de 2004)	7
Caso 774: CIM 7 1), 35 2) a), 36 1), 50, 67 1) - Alemania: Bundesgerichtshof - VIII ZR 67/04 (2 de marzo de 2005)	9
Caso 775: CIM 25, 38, 39 1), 40, 44, 45 1) b), 74 - Alemania: Landgericht Frankfurt am Main - 2-26 O 264/04 (11 de abril de 2005)	11
Caso 776: CIM 38 1), 2), 39 1) - México: Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada - 254/2004 - Barcel S.A. de C.V. v. Steve Kliff (3 de octubre de 2006)	12
Caso 777: CIM 1, 4, 8 1), 8 2), 8 3), 9 1), 9 2) - Estados Unidos: U.S. [Federal] Court of Appeals for the Eleventh Circuit - 05-13005 - Treibacher Industrie, A.G. v. Allegheny Technologies, Inc. (12 de septiembre de 2006)	13



INTRODUCCIÓN

La presente compilación de resúmenes forma parte del sistema de reunión y difusión de información sobre fallos judiciales y laudos arbitrales basados en las convenciones y leyes modelo dimanantes de la labor de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Su objetivo es facilitar la interpretación uniforme de esos textos jurídicos con arreglo a normas internacionales, que estén en consonancia con el carácter internacional de los textos, por oposición a los conceptos y usos jurídicos de ámbito estrictamente nacional. Para obtener información más detallada acerca de las características y de la utilización de este sistema, consúltese la Guía del Usuario (A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1). Los documentos en que se resume la jurisprudencia basada en textos de la CNUDMI figuran en el sitio de su secretaría en Internet (<http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do>).

En cada compilación de tal jurisprudencia (serie denominada CLOUT) figura, en la primera página, un índice en el que se enumeran las referencias completas de cada caso reseñado en el documento, junto con los artículos de cada texto de la CNUDMI que el tribunal estatal o arbitral ha interpretado o al que se ha remitido. En el encabezamiento de cada caso se indican la dirección de Internet (URL) donde figura el texto completo de las decisiones en su idioma original, y las direcciones de Internet en que se han consignado las traducciones a uno o más idiomas oficiales de las Naciones Unidas, cuando están disponibles (se ruega tomar nota de que las remisiones a sitios que no sean sitios oficiales de las Naciones Unidas no implican que la Organización o la CNUDMI aprueben el contenido de dichos sitios; además, los sitios de Internet cambian con frecuencia; todas las direcciones de Internet enunciadas en el presente documento son válidas en la fecha de su presentación). Los resúmenes de los casos que interpretan la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional incluyen palabras clave de referencia que están en consonancia con las consignadas en el Tesauro relativo a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, preparado por la secretaría de la Comisión en consulta con los corresponsales nacionales. Los resúmenes de los casos en los que se interpreta la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza también incluyen palabras clave de referencia. Se puede realizar una búsqueda de los resúmenes en la base de datos disponible en el sitio de la CNUDMI en Internet por medio de palabras clave de identificación, a saber: país, texto legislativo, número de caso en la serie CLOUT, número de documento de dicha serie, fecha de la decisión o mediante cualquier combinación de estos criterios de búsqueda.

Los resúmenes han sido preparados por los corresponsales nacionales designados por sus respectivos gobiernos, o por colaboradores particulares; en casos excepcionales pueden ser preparados por la propia secretaría de la CNUDMI. Cabe señalar que ni los corresponsales nacionales, ni nadie relacionado, directa o indirectamente, con el funcionamiento del sistema asumen responsabilidad alguna por cualquier error u omisión, o toda otra deficiencia.

Copyright © United Nations 2007
Impreso en Austria

Reservados todos los derechos. El presente documento puede reproducirse en su totalidad o en parte solicitando permiso a la Secretaría de la Junta de Publicaciones de las Naciones Unidas, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017 (Estados Unidos de América). Las autoridades y las instituciones públicas pueden reproducir el documento en su totalidad o en parte sin necesidad de solicitar autorización, pero se ruega que lo comuniquen a las Naciones Unidas.

Casos Relativos a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CIM)

Caso 770: CIM 4, 11, 35, 36, 38, 39, 40, 49, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 96

República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC]

30 de marzo de 1999

Publicado en chino: Zhong Guo Guo Ji Jing Ji Mao Yi Zhong Cai Wei Yuan Hui Cai Jue Shu Hui Bian [Repertorio de sentencias arbitrales de la CIETAC] (mayo de 2004) 1999 vol., páginas 1703 a 1738

Traducción al inglés: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990330c2.html>

Resumen preparado por Damon Schwartz

El litigio se refiere a la conformidad de las mercaderías, a los plazos para cursar una comunicación y al artículo 40 “válvula de seguridad”, a la resolución por incumplimiento esencial así como al cálculo de indemnización por daños y perjuicios.

Un comprador estadounidense celebró múltiples contratos con un vendedor chino relativos a la adquisición y transporte de bridas de acero al carbono forjado (“bridas”). En cada uno de los contratos se habían estipulado cláusulas diferentes sobre: cantidad, especificaciones, precios, y plazo de entrega. Sin embargo, otras cláusulas, como por ejemplo, las que versaban sobre calidad, examen de las mercaderías, reclamaciones, y arbitraje eran las mismas en todos ellos. Asimismo, el vendedor debía presentar los llamados informes de pruebas de taller (“IPT”) en los que figuraban los datos químicos y térmicos de las bridas. El comprador tenía la opción de examinar las mercaderías antes de su expedición y ese derecho a examinarlas formaba parte inseparable del acuerdo. En las primeras fases de la relación contractual, las partes resolvieron algunos problemas menores relativos a la calidad de las mercaderías sin remitirse a los plazos contractuales previstos para reclamaciones.

Tras algunos años, uno de los clientes del comprador descubrió defectos en las mercaderías. A raíz de ello, el cliente devolvió todas las bridas al comprador y solicitó indemnización. El comprador exigió al vendedor una indemnización, pero las negociaciones no tuvieron éxito porque el vendedor rechazó toda responsabilidad alegando que según el contrato las reclamaciones únicamente se podían presentar dentro de un plazo de 90 días desde la llegada de las mercaderías.

Finalmente, el comprador llegó a un acuerdo con el vendedor respecto de la indemnización y redujo las pérdidas vendiendo las bridas a un precio menor. Además, el comprador comunicó al vendedor que no aceptaría ninguna brida más, de las previstas en el contrato, que aún no hubiese sido entregada.

Cuando el caso se presentó al tribunal arbitral, ambas partes convinieron en que la CIM era aplicable en virtud de la legislación de la República Popular China y porque sus respectivos países eran signatarios de la CIM. Se nombraron peritos para que dictaminasen sobre la existencia de defectos en las mercaderías y sobre la autenticidad de los datos de las pruebas.

El comprador exigió una indemnización de daños y perjuicios en los términos del artículo 74 de la CIM por infracción de lo establecido en los párrafos 1) y 2) del artículo 36 y en el artículo 40. Adujo que, habida cuenta de que estaba facultado

para examinar las mercaderías tanto antes como después de su expedición, el hecho de que no las hubiese examinado con anterioridad a la expedición no significaba que había renunciado a su derecho a examinarlas posteriormente. Asimismo, alegó que se debía considerar a los IPT como una garantía de calidad. Dado que se descubrió que algunas de las bridas no concordaban con esos informes, el comprador reclamó una prórroga del plazo para presentar reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios. El tribunal estimó parcialmente el argumento del comprador en el sentido de que los IPT deberían ser considerados como una garantía de calidad.

El vendedor basó sus argumentos en lo estipulado en el párrafo 1) del artículo 38, y los párrafos 1) y 2) del artículo 39. Adujo que el comprador no había llevado a cabo el examen de las mercaderías, con el que habría descubierto muchos de sus posibles defectos. El vendedor también alegó que el comprador había renunciado a su derecho de exigir indemnización por defectos de calidad dado que no había examinado las mercaderías con anterioridad a su expedición ni presentado su solicitud de indemnización dentro de los tres meses siguientes a la llegada de las mercaderías al puerto de destino. El vendedor sostuvo que las bridas no tenían defectos, como lo demostraban las pruebas realizadas por el comprador, y que los procedimientos de prueba que éste había utilizado eran incorrectos y por lo tanto inexactos. Además, el vendedor exigió que el comprador pagase las bridas previstas en los contratos no entregadas aún y que le abonase una compensación por los gastos de almacenaje, reprocesamiento y lucro cesante.

En el informe de los peritos se llegó a la conclusión de que algunas de las bridas sometidas a prueba eran defectuosas con arreglo a las normas especificadas en los contratos. Los peritos también constataron que los métodos de prueba propios e independientes aplicados por el comprador no eran totalmente compatibles con los procedimientos de ensayo aceptables y no podían utilizarse para establecer la tasa de defectos.

El tribunal resolvió que el hecho de no examinar las mercaderías con anterioridad a su expedición no implicaba una renuncia al derecho de hacerlo posteriormente, dado que las cláusulas contractuales estipulaban que este derecho de examen por parte del comprador era un elemento inseparable del contrato. El tribunal estimó que era aplicable a las estipulaciones contractuales el párrafo 1) del artículo 36 de la CIM, que establece que el vendedor será responsable de toda falta de conformidad que exista en el momento de la transmisión del riesgo al comprador, aun cuando esa falta sólo sea manifiesta después de ese momento. El tribunal sostuvo que el vendedor era responsable en virtud del párrafo 2) del artículo 36 de la CIM, puesto que las bridas defectuosas constituían un incumplimiento de la garantía de que las mercaderías seguirían siendo aptas para su uso ordinario. Sin embargo, el plazo de garantía no era indefinido y no podía prorrogarse más allá del período de dos años establecido en el párrafo 2) del artículo 39.

Respecto de las mercaderías defectuosas y no conformes, el tribunal resolvió que el vendedor no debía ser considerado responsable por los defectos patentes luego del período de tres meses estipulado en los contratos, ya que esos defectos podrían haber sido descubiertos mediante un simple examen de las mercaderías. Por lo tanto, el comprador debía compartir algún grado de responsabilidad por las pérdidas resultantes de no haber examinado las bridas [párrafo 1) del artículo 38 de la CIM]. En cambio, el tribunal consideró que el vendedor era responsable de los vicios ocultos más allá del período de tres meses y hasta un máximo de dos años, habida

cuenta de que esos defectos sólo podían descubrirse mediante pruebas destructivas de la mercadería o con el uso efectivo de la cosa. Si bien el tribunal llegó a la conclusión de que algunas de las fallas existentes en el caso eran defectos que el vendedor “no podía ignorar”, sostuvo que el artículo 40 de la CIM era de importancia secundaria frente al párrafo 2) del artículo 39 de dicha convención. El tribunal decidió que el texto del párrafo 2) del artículo 39 de la CIM excluye una demanda de indemnización posterior al plazo de dos años establecido en dicho párrafo.

El tribunal sostuvo que el vendedor sería responsable por los vicios ocultos si el comprador había presentado su reclamación dentro del plazo de dos años contados a partir de la recepción de las bridas. Desestimó las reclamaciones por vicios no ocultos puesto que el comprador debió haber examinado las mercaderías y notificado al vendedor al respecto dentro del plazo de tres meses estipulado en los contratos. El tribunal también sostuvo que la pretensión del comprador de una compensación por el lucro cesante respecto de las bridas no entregadas no resultaba avalada por indicios de defectos graves. El tribunal estimó que las reclamaciones por pérdidas que solicitó el comprador eran un método aceptable de reducir los daños sufridos. Resolvió que no incumbía al vendedor ninguna responsabilidad por la solución transaccional de la controversia entre el comprador y su cliente.

Caso 771: CIM 9, 50, 74, 78

República Popular China: China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC]

21 de mayo de 1999

Publicado en chino: Zhong Guo Guo Ji Jing Ji Mao Yi Zhong Cai Wei Yuan Hui Cai Jue Shu Hui Bian [Repertorio de sentencias arbitrales de la CIETAC] (mayo de 2004) 1999 vol., páginas: 1980 a 1988

Traducción al inglés: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990521c1.html>

Resumen preparado por Jean Ho

El caso se refiere a la conformidad de las mercaderías, una solicitud de rebaja de precio por falta de conformidad y a las normas generales para la graduación de daños y perjuicios.

Un vendedor coreano y un comprador chino celebraron un contrato de compraventa de excavadoras. En las cláusulas de pago se estipuló el precio de las mercaderías y el interés. Al recibir las mercaderías, el comprador realizó un pago parcial al vendedor y posteriormente revendió las excavadoras. Tras intentar repetidamente, sin éxito, que el comprador hiciera el pago pendiente y sufrir graves pérdidas económicas, el vendedor inició un procedimiento arbitral en contra del comprador.

El comprador alegó que las excavadoras entregadas por el vendedor no eran las estipuladas contractualmente, sino que se relacionaban con acuerdos previos, dado que el conocimiento de embarque demostraba que esa maquinaria había sido expedida en septiembre de 1994. Dado que el vendedor había modificado el contenido del contrato, el comprador estaba tan sólo ayudándolo a vender las excavadoras. Además, el ancho de dos excavadoras no se ajustaba a las especificaciones del contrato y otras excavadoras presentaban diversos defectos de calidad. Según la opinión de los peritos contratados por el comprador, tales defectos

daban al comprador derecho a solicitar una rebaja del precio (artículo 50 de la CIM).

El vendedor adujo que el hecho de que la fecha de entrega difiriese de la estipulada en el contrato o que fuese anterior a la fecha de celebración del mismo no era óbice para que las mercaderías entregadas fuesen las contratadas (artículo 9 de la CIM). Por lo tanto, el comprador no estaba facultado para solicitar una rebaja del precio por falta de conformidad luego de haber examinado y aceptado las mercaderías. Toda reclamación de rebaja del precio debería haber sido presentada antes de aceptarlas. El comprador tampoco tenía derecho a exigir una indemnización de daños y perjuicios por mercaderías defectuosas puesto que no había presentado el certificado de inspección expedido por el organismo de inspección de productos básicos competente.

El tribunal decidió conceder una rebaja del 10 por ciento del precio de contrato. El comprador debía pagar al vendedor el precio de contrato pendiente e intereses sobre el precio pagado, así como intereses sobre el precio pagado y no pagado (artículo 78 de la CIM). El tribunal estimó en efecto que no era un hecho esencial que las excavadoras hubieran sido entregadas con anterioridad a la celebración del contrato, ya que lo que se debía dilucidar era si las mercaderías entregadas eran las estipuladas en el contrato. El tribunal estimó que el vendedor había cumplido sus obligaciones al afectar al contrato las excavadoras de entre las mercaderías entregadas puesto que el comprador había aceptado tanto el conocimiento de embarque presentado por el vendedor como la recepción de las excavadoras. Al aceptar la entrega de las excavadoras y luego revenderlas, el comprador había perdido el derecho de alegar que las excavadoras no eran las estipuladas contractualmente. El tribunal coincidió con el comprador en que éste tenía derecho a reclamar una indemnización de daños y perjuicios por las dos excavadoras que no se ajustaban a las especificaciones contractuales (artículo 74 de la CIM). El comprador también estaba facultado para reclamar una indemnización por los defectos de calidad planteados dentro del plazo de garantía no obstante la falta de un certificado de inspección. El tribunal estimó que dado que el vendedor no impugnó las reclamaciones del comprador respecto de las deficiencias de las mercaderías, ello llevó al comprador a creer que no era necesario presentar un certificado de inspección a fin de probar la validez de sus pretensiones.

Caso 772: CIM 1 1), 6, 57 1) a)

Alemania: Bundesgerichtshof

III ZR 237/02

30 de abril de 2003

Original en alemán

Publicado en: [2003] BGH-Report, 897; [2003] Internationales Handelsrecht (IHR), 170; [2003] Monatsschrift für Deutsches Recht (MDR), 1007; [2003] Wertpapier-Mitteilungen (MW), 2157; [2003] NJW-Rechtsprechungsreport Zivilrecht (NJW-RR), 1582; BGH Rechtsprechung (BGHR), EGÜbk Art 5 Nr 1 Erfüllungsort XX;

<http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/790.htm> (original);

<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030430g1.html> (Traducción al inglés);

<http://www.unilex.info>

Resumen preparado por el Prof. Ulrich Magnus, corresponsal nacional, y por Jan Lüsing

En este caso, el Tribunal Federal de Justicia debía decidir si los tribunales alemanes tenían competencia internacional de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Convenio de Bruselas). En dicho artículo la competencia internacional se determina por el lugar de cumplimiento: así, la cuestión planteada giraba en torno a saber si la controversia se regía por la CIM y, por consiguiente, si el lugar de cumplimiento debía determinarse de conformidad con el párrafo 1) a) de dicha Convención.

El demandante, un productor de pepinos alemán, celebró un contrato con una cooperativa holandesa para la utilización de sus pepinos. El contrato entre las partes formaba parte del procedimiento normal de venta, mientras que la función de la cooperativa consistía en clasificar los pepinos según tipos de calidad y lanzar los productos al mercado mediante subastas, ventas por adelantado y ventas.

El productor de pepinos inició una acción en Alemania contra la cooperativa por el pago del “precio de compra” pendiente, por daños y perjuicios por haber clasificado los pepinos supuestamente de manera errónea, y para que se le reembolsasen los honorarios de abogados pagados antes de entablar la acción. El tribunal regional estimó en gran parte fundadas las pretensiones del demandante. El Tribunal Regional Superior revocó el veredicto porque los tribunales alemanes no tenían competencia internacional en la cuestión. El demandante solicitó asistencia jurídica para presentar una apelación ante el Tribunal Federal de Justicia, alegando que el Tribunal Regional Superior no había tenido en cuenta el hecho de que las partes habían convenido precios predeterminados para la próxima cosecha de pepinos.

El Tribunal Federal de Justicia confirmó la decisión del tribunal inferior. Al estimar que la CIM no resultaba aplicable al caso, el tribunal constató que el acuerdo que habían celebrado las partes no debía ser clasificado como un contrato de compraventa, sino como un contrato de intermediación, que se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la CIM. El acuerdo sobre precios fijos predeterminados no significa necesariamente que este acuerdo se equipare a una compraventa. Por lo tanto, el Tribunal Federal sostuvo que el lugar de cumplimiento no debía determinarse en virtud del párrafo 1) a) del artículo 57 de la CIM sino por la ley holandesa, de conformidad con las normas alemanas sobre conflicto de leyes. Por consiguiente, la competencia internacional de los tribunales alemanes no debía determinarse con arreglo al párrafo 1 del artículo 5 del Convenio de Bruselas.

Caso 773: CIM 4, 36, 38, 39 1), 40, 44

Alemania: Bundesgerichtshof

VIII ZR 321/03

30 de junio de 2004

Original en alemán

Publicado en: [2004] BGH Report, 1645; [2004] Internationales Handelsrecht (IHR), 201; [2004] Recht der internationalen Wirtschaft (RIW), 788; [2004] Neue

Juristische Wochenschrift (NJW), 3181; [2004] Monatsschrift für Deutsches Recht (MDR), 1305; [2004] The European Legal Forum (EuLF), 385;
<http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/847.htm> (original);
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040630g1.html> (Traducción al inglés);
<http://www.unilex.info>

Resumen preparado por el Prof. Ulrich Magnus, corresponsal nacional, y por Jan Lüsing

La decisión gira en torno a las condiciones que permitirían invertir la carga de la prueba con arreglo al artículo 40 de la CIM.

El demandante, una sociedad establecida en España, vendió al demandado pimentón y aceite. Este último utilizó el precio de esa compra como compensación de una supuesta reclamación por daños y perjuicios resultantes de la falta de conformidad de mercaderías entregadas anteriormente.

La entrega anterior consistió en pimentón dulce, que no debía ser irradiado según lo pactado por las partes. El comprador examinó las mercaderías únicamente en lo tocante al grado de pureza pero no a la irradiación, dado que un examen de ese tipo es costoso y requiere tiempo. Solamente tras la publicación de un artículo en una revista de pruebas, que indicaba la manera de determinar la exposición a radiación, el demandado comenzó a realizar pruebas de cuatro muestras de las mercaderías entregadas, que demostraron que sí habían sido expuestas. A raíz de los informes de tales pruebas, el demandado presentó por carta una reclamación por la irradiación de las mercaderías entregadas. Posteriormente, exigió indemnización de daños y perjuicios. El demandante negó que las mercaderías hubiesen sido irradiadas.

El tribunal regional reconoció que el vendedor tenía derecho a percibir el precio íntegro de la venta y el tribunal regional superior rechazó la apelación presentada por el comprador. Éste apeló ante el Tribunal Federal de Justicia.

El Tribunal Federal constató, de conformidad con el fallo del tribunal regional superior, que el comprador había perdido su derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías con arreglo al párrafo 1) del artículo 39 de la CIM porque no había comunicado dicha falta dentro de un plazo razonable. El Tribunal Federal declaró que el plazo había comenzado a correr a partir de la recepción del informe de prueba, ya que no era razonable exigir al comprador pruebas habituales del pimentón para detectar su irradiación debido a los gastos que ello suponía. Sin embargo, el tribunal sostuvo que el período de más de dos meses transcurrido entre el momento en el que el comprador tuvo conocimiento del primer informe y la comunicación de su reclamación no podía considerarse como un plazo razonable conforme al párrafo 1) del artículo 39 de la CIM.

En el fallo del tribunal regional superior se entendió que el comprador no presentó una excusa razonable para justificar el haber omitido la notificación a su debido tiempo (artículo 44 de la CIM) y que no había presentado prueba de que el vendedor conocía o no podía ignorar los hechos respecto de la irradiación del pimentón (artículo 40 de la CIM). Sin embargo, el Tribunal Federal no coincidió con el tribunal inferior en lo que respecta al artículo 40 de la CIM. Si bien en principio el comprador debía probar los antecedentes de hecho del artículo 40 de la CIM puesto que este artículo constituye una excepción al artículo 39 de dicha convención, el Tribunal Federal estimó que el tribunal regional superior no había analizado cabalmente la cuestión de saber cuál de las partes podía proporcionar pruebas sobre

los antecedentes de hecho con mayor facilidad (proximidad de la prueba). El Tribunal declaró que si la aportación de la prueba conllevaba dificultades excesivas para el comprador, la carga de la prueba se podía invertir y recaer sobre el vendedor, afirmando que este principio se acepta en el ámbito de la CIM y se tiene en cuenta en su artículo 40. Este artículo no sólo hace referencia al conocimiento efectivo por parte del vendedor de los hechos en los cuales se basa el incumplimiento del contrato, sino que también se refiere a su ignorancia por negligencia. Además, cabía suponer que el vendedor actuó con negligencia grave si las mercaderías se apartaban ampliamente de lo estipulado en el contrato y la falta de conformidad era consecuencia de un hecho ocurrido en la órbita de influencia del vendedor.

Sin embargo, en el presente caso el Tribunal Federal no afirmó que procedía presumir negligencia grave, debido a la dificultad de detectar la exposición a radiación, sino que consideró que esa negligencia resultaba del principio de “proximidad de la prueba”. Si bien el comprador debía probar que los bienes entregados por el vendedor habían sido irradiados, el vendedor debía demostrar que no actuó con negligencia grave. Si las alegaciones del comprador eran correctas, se debía probar además que la radiación tuvo lugar en las instalaciones del vendedor o en las del proveedor del vendedor. En este caso correspondía al vendedor explicar que no actuó con negligencia grave puesto que la violación del contrato tuvo lugar en su área de influencia.

El Tribunal Federal de Justicia revocó la decisión del tribunal regional superior y remitió el asunto al mismo para que llevase a cabo una nueva audiencia y dictase una nueva sentencia.

Caso 774: CIM 7 1), 35 2) a), 36 1), 50, 67 1)

Alemania: Bundesgerichtshof

VIII ZR 67/04

2 de marzo de 2005

Original en alemán

Publicado en: [2005] BGH-Report, 1026; [2005] Internationales Handelsrecht (IHR), 158; [2005] Recht der internationalen Wirtschaft (RIW), 547; [2005] Juristenzeitung (JZ), 844; [2005] Der Betrieb (DB), 1959; [2005] Monatsschrift für Deutsches Recht (MDR), 972; [2005] Wertpapier-Mitteilungen (WM), 1806; [2005] NJW Rechtsprechungsreport Zivilrecht (NJW-RR), 1218; [2005] The European Legal Forum (EuLF), I-148 and II-127;

<http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/999.htm> (original);

<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050302g1.html> (Traducción al inglés);

www.unilex.info

Resumen preparado por el Prof. Ulrich Magnus, corresponsal nacional, y por Jan Lüsing

El caso gira en torno a la conformidad de las mercaderías y a la rebaja del precio.

Un vendedor alemán celebró un contrato relativo a la compra de carne de cerdo con un vendedor belga. Se estipuló que la carne se entregaría directamente al cliente del comprador, quien, a su vez, expediría las mercaderías al comprador final, radicado en Bosnia y Herzegovina. La entrega de las mercaderías se realizó en tres tandas,

para las que el vendedor emitió facturas, pagaderas hasta el 25 de junio de 1999, a más tardar. La última tanda llegó a Bosnia y Herzegovina el 4 de junio de 1999.

La sospecha de que la carne de cerdo estaba contaminada con dioxina comenzó a surgir en Bélgica y Alemania en junio de 1999. El 11 de junio se dictó en Alemania una ordenanza por la que se declaraba que la carne de cerdo proveniente de Bélgica no podía ser comercializada en tanto no se presentase un certificado de sanidad que demostrase que dicha carne no contenía dioxina. El 28 de julio de 1999 se emitió una ordenanza similar en Bélgica que incluía disposiciones respecto de la carne que ya había sido exportada al exterior. El demandado había realizado solamente un pago parcial de la suma total. El precio de compra restante fue cedido al demandante [es decir, el cesionario del vendedor] por el mayorista belga.

El demandante entabló una acción exigiendo el pago del resto del precio de compra. El comprador alegó que la carne de cerdo entregada había sido retenida y finalmente eliminada por las autoridades aduaneras luego de que en Bosnia y Herzegovina se prohibiese su reventa y el comprador no pudiera presentar un certificado de aptitud sanitaria, que había solicitado en reiteradas oportunidades al vendedor mayorista belga.

Tras desestimar el tribunal regional la reclamación del pago del precio de compra restante presentada por el demandante, su apelación fue también rechazada por el tribunal regional superior. Por último, el demandante apeló la sentencia ante el Tribunal Federal de Justicia.

El Tribunal Federal de Justicia revocó la sentencia del tribunal regional superior y modificó la decisión del tribunal regional. Sostuvo que el tribunal regional superior había adoptado una decisión errónea al remitirse a precedentes de la justicia nacional únicamente. El Tribunal Federal declaró que, de conformidad con el párrafo 1) del artículo 7, las disposiciones de la CIM deben ser interpretadas de manera autónoma, es decir, remitiéndose a su carácter internacional y sin recurrir a principios elaborados para ser aplicados en el ordenamiento jurídico interno.

Respecto al fondo del asunto, el Tribunal Federal sostuvo que el demandado tenía derecho a la rebaja del precio debido a la falta de conformidad de las mercaderías entregadas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 50 de la CIM, en la medida en que la carne de cerdo entregada se había visto afectada por las medidas precautorias de la ordenanza emitida en Bélgica. El Tribunal Federal estimó que ello se aplicaba a las dos entregas iniciales, ya que la última entrega no provenía de animales sacrificados durante el período de tiempo al que se refería la ordenanza belga.

El Tribunal Federal sostuvo que en el sector del comercio mayorista e intermedio internacional la posibilidad de reventa (comerciabilidad) de las mercaderías constituye uno de los aspectos del requisito de que sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinan mercaderías del mismo tipo en los términos del párrafo 2) a) del artículo 35 de la CIM y que, en el caso de alimentos destinados al consumo humano, la posibilidad de reventa implica que las mercaderías, como mínimo, no causen daño a la salud. En la medida que esta cuestión se rija por disposiciones del derecho público, es aplicable en principio la ley del país del vendedor.

Además, el Tribunal Federal sostuvo que en el comercio mayorista e intermedio internacional, la sola sospecha de que las mercaderías pueden ser nocivas para la salud constituye una falta de conformidad y, por lo tanto, un incumplimiento contractual en todo caso si esa sospecha ha dado lugar a medidas de carácter público que excluyan la comerciabilidad de las mercaderías.

De conformidad con el párrafo 1) del artículo 36 de la CIM, el Tribunal Federal sostuvo que la falta de conformidad ya existe al momento en que el riesgo se transmite al comprador, incluso si la falta de conformidad sólo se evidencia tras la transmisión del riesgo, como por ejemplo en el caso de los vicios ocultos. Las características de las mercaderías que provocaron la pérdida de la posibilidad de reventa eran inherentes a la carne de cerdo cuando el riesgo se transmitió, puesto que no cabían dudas de que esa carne provenía de animales de los que se sospechaba que estaban contaminados con dioxina.

Argumentando que no había habido ninguna otra manera de utilizar la carne, el Tribunal Federal concedió al demandado el derecho de reducir el precio a cero respecto de las dos primeras entregas.

Caso 775: CIM 25, 38, 39 1), 40, 44, 45 1) b), 74

Alemania: Landgericht Frankfurt am Main

2-26 O 264/04

11 de abril de 2005

Original en alemán

Publicado en: [2005] Internationales Handelsrecht (IHR) 2005, 161

<http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/1014.htm> (original);

<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050411g1.html> (Traducción al inglés)

Resumen preparado por el Prof. Ulrich Magnus, corresponsal nacional, y por Jan Lüsing

El presente caso se refiere a cuestiones de incumplimiento esencial, al examen de las mercaderías y a su falta de conformidad.

El comprador, una sociedad establecida en Kampala (Uganda) celebró un contrato con un vendedor alemán relativo a la compra de zapatos usados de primera y segunda calidad. Las partes pactaron en el contrato una cláusula de costo y flete FOB Mombasa (Kenya). El vendedor expidió las mercaderías a Mombasa. El vendedor entregó el conocimiento de embarque original tras el pago del último plazo del precio de compra. Luego de que el comprador reexpidiera los zapatos a Kampala (Uganda) y los examinara, comunicó al vendedor la falta de conformidad de las mercaderías. Asimismo, la Oficina Nacional de Normas de Uganda se negó a otorgar la licencia de importación debido a las malas condiciones y falta de higiene de los zapatos. El comprador comunicó por segunda vez la falta de conformidad y fijó un plazo adicional para que se cumpliera lo pactado. Finalmente, el comprador resolvió el contrato por carta.

El comprador inició una acción, en Alemania, ante el Tribunal Regional de Frankfurt am Main contra el vendedor reclamando el reembolso del precio de compra y los gastos en que había incurrido, tales como los de aduana así como los de manipulación y flete. El demandante adujo que los zapatos entregados no estaban en conformidad con los grados de calidad previstos en el contrato. Respecto de la

puntualidad de la comunicación de falta de conformidad, el demandante manifestó que el vendedor sabía que las mercaderías volverían a ser expedidas de Mombasa a Kampala y que no existía una oportunidad razonable para examinarlas en Mombasa, dado que ese examen habría conllevado el pago de más derechos aduaneros como consecuencia de romper los precintos de la aduana. En su defensa, el vendedor invocó el artículo 39 de la CIM arguyendo que el demandante no le había comunicado la falta de conformidad de las mercaderías a su debido tiempo. También negó tener conocimiento de que el comprador las reexpediría.

A pesar de afirmar que se trataba de un incumplimiento esencial, el tribunal desestimó la pretensión del demandante, sosteniendo que éste no tenía derecho a ningún pago con arreglo al párrafo 1) b) del artículo 45, al artículo 74 o al párrafo 2) del artículo 81 de la CIM, ni a ninguna otra disposición.

El tribunal constató que la comunicación de falta de conformidad no había sido cursada en un plazo razonable, de manera que el demandante había perdido el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías con arreglo al párrafo 1) del artículo 39 de la CIM. Al examinarlas tras haber transcurrido más de tres semanas después de recibir el conocimiento de embarque, el demandante no cumplió los requisitos establecidos en el párrafo 1) del artículo 38, puesto que la falta de conformidad de los zapatos podía haberse detectado sin ningún esfuerzo tomando tan sólo una muestra al azar.

Asimismo, el tribunal no aceptó la invocación por el demandante del párrafo 3) del artículo 38 de la CIM. En lo tocante al conocimiento del vendedor en el momento de celebrar el contrato acerca de la posibilidad de que las mercaderías se volviesen a expedir, como prescribe el párrafo 3) del artículo 38, el tribunal sostuvo que el mero hecho de que el comprador tuviera su sede en Kampala (Uganda) no era suficiente para imponer la obligación de comunicar de la posibilidad de una reexpedición. Respecto de la oportunidad desaprovechada de examinar las mercaderías, el tribunal estimó que no podía considerarse que el pago adicional de derechos aduaneros en Kenya hubiese hecho irrazonable tal oportunidad en los términos del párrafo 3) del artículo 38 de la CIM, dado que incumbía al comprador tener en cuenta el número y el montante de los derechos aduaneros.

Al denegar al demandante el derecho de reducir el precio con arreglo al artículo 44 de la CIM, el tribunal razonó que el demandante no había presentado una excusa razonable por no haber comunicado oportunamente la falta de conformidad en consonancia con el artículo 44 de la CIM. El tribunal no abordó la cuestión de saber si era aplicable o no el artículo 40 de la CIM al presente caso.

Caso 776: CIM 38 1), 2), 39 1)

México: Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Lerma de Villada
254/2004

Barcel S.A. de C.V. v. Steve Kliff

3 de octubre de 2006

Este caso gira en torno a la falta de conformidad de las mercaderías.

Una sociedad mexicana, que comercializaba galletas saladas (el comprador), celebró un contrato oral con un vendedor ubicado en California para la compra de envolturas de papel de aluminio.

En el momento de la entrega, el comprador observó que las mercaderías presentaban un estado tóxico y maloliente, por lo que no resultaban aptas en absoluto para su uso previsto como envase de alimentos. Finalmente, el comprador demandó al vendedor por incumplimiento contractual resultante de la falta de conformidad de las mercaderías.

El tribunal constató que el comprador no había comunicado al vendedor la falta de conformidad de las mercaderías en un plazo razonable. Concretamente, el tribunal se remitió a los artículos 38 y 39 de la CIM, relativos al plazo razonable para examinar las mercaderías y para comunicar la falta de conformidad de las mismas. Al analizar esos artículos, el tribunal se refirió al artículo 383 del Código de Comercio de México, en el que se establece un plazo de cinco días para que el comprador informe al vendedor de una falta de conformidad patente y un plazo de treinta días para informar de una falta de conformidad que no sea patente, llegando a la conclusión de que la CIM y las disposiciones internas eran análogas. Por consiguiente, el tribunal desestimó la demanda.

Caso 777: CIM 1, 4, 8 1), 8 2), 8 3), 9 1), 9 2)

Estados Unidos: U.S. [Federal] Court of Appeals for the Eleventh Circuit
05-13005

Treibacher Industrie, A.G. v. Allegheny Technologies, Inc.

12 de septiembre de 2006

Publicado en inglés: 464 F.3d 1235 (11th Cir. 2006); 2006 U.S. App. LEXIS 23252
<http://www.call.uscourts.gov/opinions/ops/200513005.pdf> (Texto en inglés)

Resumen preparado por John H. Rooney, Jr.

Un proveedor austriaco y un comprador estadounidense situado en Alabama celebraron un conjunto de contratos relativos a la compra de un compuesto químico en “consignación”. En cada contrato se especificaba la cantidad del compuesto que se entregaría al comprador. En todos los contratos anteriores a los contratos en litigio, el comprador había comprado la totalidad del compuesto que el proveedor le suministraba, y en una oportunidad había desistido de una tentativa de devolver el producto que no había utilizado. El comprador, durante el plazo de duración de los dos contratos litigiosos, comunicó al proveedor que no aceptaría más entregas del compuesto y no pagaría el compuesto que había sido entregado pero no utilizado. Sin que el proveedor tuviese conocimiento, el comprador había encontrado una fuente de suministro menos costosa. El proveedor encontró otro comprador, pero a un precio menor. Posteriormente, el proveedor inició una acción judicial para recuperar la suma que el comprador debería haber pagado si hubiese aceptado la entrega de todo el producto especificado en los contratos.

El proveedor y el comprador discrepaban con respecto al significado del término entrega en “consignación”. Según el perito del comprador, en la industria de los metales, el término “consignación” significaba que la venta no se perfeccionaba hasta que el comprador utilizara efectivamente el compuesto. El proveedor presentó pruebas basadas en la conducta previa de las partes con el objeto de establecer que “consignación” significaba que el comprador tenía la obligación de pagar la totalidad del compuesto entregado, pero que no recibiría la factura hasta tanto no lo utilizase efectivamente.

Al aplicar la CIM, el tribunal de nivel inferior decidió que las pruebas relativas a la interpretación de dicho término basada en las conductas seguidas por las partes en sus relaciones comerciales primaban sobre las de su interpretación habitual en la industria, y sostuvo que el comprador estaba obligado a adquirir la totalidad del compuesto entregado de conformidad con el contrato y condenó al comprador a pagar el precio.

El comprador apeló la decisión, arguyendo que de conformidad con la CIM un término de un contrato debía ser interpretado según su uso habitual “salvo que las partes hayan acordado expresamente otro uso”. El comprador también adujo que la práctica establecida entre las partes no requería que el comprador utilizase y pagase la totalidad del [compuesto] especificado en el contrato. Por último, sostuvo que el tribunal inferior había estimado erróneamente que el proveedor había reducido adecuadamente sus pérdidas.

El tribunal de apelaciones confirmó la sentencia del tribunal inferior en todas sus partes.

En primer lugar, el tribunal de apelaciones confirmó que la CIM resultaba aplicable al caso, puesto que los Estados Unidos y Austria eran Estados contratantes en la Convención (artículo 1 de la CIM). El tribunal de apelaciones calificó la cuestión como un incumplimiento contractual regido por el artículo 9 de la CIM, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.

El tribunal de apelaciones observó que en el artículo 8, que rige la interpretación de las declaraciones y actos de las partes, se trataba por separado del caso en que una parte tenía conocimiento de la intención real de la otra parte y del caso en que no tenía ese conocimiento. El tribunal llegó a la conclusión de que cuando no se conoce la intención real, el artículo 8 impone la norma del sentido que habría dado una persona razonable. En el párrafo 3) del artículo 8 se indicaban las fuentes para determinar la intención real de una parte, “en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hubieran establecido entre ellas, los usos y el comportamiento ulterior de las partes”.

El comprador arguyó que el artículo 9 exigía el acuerdo expreso de las partes para que el uso entre las partes prevalezca sobre el uso habitual establecido en la industria. Concretamente, el comprador adujo que en el párrafo 2) del artículo 9 se establecía que las partes debían pactar expresamente no quedar obligadas por el uso habitual. Como respaldo de tal argumento, el comprador citó la parte del párrafo 1) del artículo 9 según la cual las partes quedaban obligadas “por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas”. El comprador también sostuvo que aplicando esta definición al párrafo 2) del artículo 9, los términos del contrato debían interpretarse de conformidad con el uso habitual salvo acuerdo en contrario de las partes.

El tribunal de apelaciones constató que la interpretación del comprador tendría como resultado la anulación del párrafo 3) del artículo 8 y de la última parte del párrafo 1) del artículo 9.

La última parte del párrafo 1) del artículo 9 quedaría anulada porque las partes ya no se regirían por “cualquier práctica que hayan establecido entre ellas”. Rechazando la interpretación que daba el comprador al párrafo 2) del artículo 9, el tribunal de apelaciones sostuvo que el uso que las partes hacían de un término en

sus relaciones comerciales regía el significado de ese término cuando estaba en conflicto con el uso habitual de dicho término.

El tribunal de apelaciones observó que no se impugnaba que las partes habían celebrado una serie de contratos relativos al suministro de compuestos químicos entre 1993 y 2000. Todos ellos se referían a cantidades concretas del producto para su entrega en “consignación”, y el comprador lo guardaba por separado, presentando informes mensuales de utilización al proveedor. Estos informes servían de base para emitir las facturas al comprador por el producto utilizado. El comprador había usado y pagado todos los compuestos que se le habían entregado en el marco de todos los contratos celebrados con anterioridad a los dos contratos litigiosos.

El tribunal de apelaciones también observó que el comprador, con anterioridad, había actuado como si estuviese obligado a comprar todos los compuestos entregados de conformidad con los contratos.

Por último, el tribunal de apelaciones constató que el proveedor sí adoptó las medidas razonables para reducir las pérdidas, como exige el artículo 77 de la CIM, puesto que había encontrado un comprador de parte del compuesto en un plazo de 17 días desde la comunicación cursada por el comprador. El tribunal sostuvo que el artículo 77 imponía al comprador la carga de probar la omisión por parte del proveedor de las medidas razonables para reducir la pérdida, pero el comprador no había presentado pruebas que demostrasen esa omisión.

El tribunal de apelaciones decidió que el tribunal de distrito había fallado acertadamente que, de conformidad con la CIM, el significado que las partes daban a un término contractual en el marco de las prácticas comerciales que seguían determinaba el significado de dicho término en caso de conflicto con el uso habitual del término. Claramente el tribunal de distrito no había errado al considerar que el proveedor y el comprador interpretaban sus contratos en el sentido de que obligaban al comprador a comprar todo el compuesto especificado en cada contrato, y que el proveedor había adoptado las medidas razonables para reducir las pérdidas tras el incumplimiento del comprador.
